

INSURRECCION POPULAR Y LUCHA ARMADA.

La generación de los sesenta

Carlos A. Dasso¹

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Material original autorizado para su primera publicación en la revista académica Hologramática

RESUMEN

Cuando la dictadura militar de Onganía, además de proscribir a todos los partidos políticos y suprimir la autonomía universitaria, empezó a desarrollar una escalada de intervenciones sobre los sindicatos, desactivando progresivamente la negociación colectiva, el conflicto social se tensó a tal punto, que sólo dejó margen para una resolución violenta del mismo.

En la primera etapa de oposición a la dictadura militar, cuando las formas de negociación corporativas (entre sindicalistas y empresarios, con arbitraje del gobierno) fueron clausuradas por el gobierno, los trabajadores asalariados empezaron a movilizarse, para resistir los embates autoritarios contra sus derechos sociales, civiles y políticos. En un segundo momento, cuando se agrava el conflicto social y se producen las insurrecciones de masa lideradas por la clase obrera, es cuando surgen organizaciones de militantes que abrieron en la historia reciente de nuestro país, *la experiencia colectiva de la lucha armada*, como forma complementaria o superior – según las interpretaciones- de la lucha de masas.

¹ Dasso Carlos Alberto, Master en C. Política y Sociología de FLACSO, Lic. en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Profesor Titular de Sociología del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Director del Programa de Investigación sobre problemáticas de derechos económicos, sociales y culturales (PRODESC).

Las adversidades sociales y políticas que tuvo que soportar la mayoría del pueblo, generó un sentimiento colectivo de solidaridad que favoreció el surgimiento de un frente opositor a la dictadura militar. En ese contexto, la generación de los sesenta dio sus primeros pasos políticos a través de prácticas semiclandestinas y clandestinas. En los diferentes terrenos de lucha donde se desarrolló la resistencia a la dictadura militar, esa nueva generación se encontró con la militancia combativa proveniente de generaciones anteriores, de la que recuperó valiosos aprendizajes políticos, que la condujo a romper con antiguos paradigmas liberales y con prácticas partidocráticas.

Palabras clave: dictadura militar, lucha armada, generación de los sesenta

ABSTRACT

POPULAR INSURRECTION AND ARMED STRUGGLE. THE SIXTIES GENERATION

When Onganía's military dictatorship developed a climbing of interventions on unions, apart from proscribing all political parties and deleting university autonomy, it disabled the collective negotiation so the social conflict was tensed to a point that only left a margin for a violent resolution.

In the first opposition stage to military dictatorship, when the corporative negotiation forms (between unions and enterprises, with government arbitration) were closed by the authorities, the employees started to move, to resist the authoritarian shocks against their social, civil and political rights. In a second time, when the social conflict tightens and mass insurrections led by the working class start, is when militant organizations appear, those which opened in the recent history of Argentina the collective experience of armed struggle as a complementary or superior ways of mass struggle – depending on interpretations.

Social and political adversities that most of the people had to bear generated a collective feeling of solidarity that favoured the merging of an opposition front of military dictatorship. In that context, the 60s generation gave its first political steps into semi clandestine and clandestine practices. In the different struggle grounds where the resistance grew, that generation found with the combative militancy that came from

previous generations, which regained many politic knowledge, that drove the new one to break with some old liberal paradigms and parties practices.

Keywords: military dictatorship, armed struggle, sixties generation

Con la destitución del gobierno de Illia, concluía el ciclo de las experienciasseudodemocráticas. Los intentos de gobernar excluyendo a la mayorías, habían fracasado, entre otros motivos, debido a la imposibilidad de estabilizar un régimen político basado en la precarización y corporativización de la seguridad social. Agotadas estas experiencias y ante el riesgo de que la movilización social tuviera avances políticos a través del peronismo, el bloque de poder y su alianza corporativa, eligieron la opción autoritaria que ofrecía el partido militar.

El control militar que EEUU ejerció a través de la “Escuela de las Américas” sobre los ejércitos latinoamericanos, con el fin de asegurar su hegemonía económica sobre la región, se produjo simultáneamente con el establecimiento en nuestro país de la dictadura de Onganía. Este régimen autoritario, irrumpió en el proceso político, clausurando progresivamente todas las vías institucionales de expresión de demandas sociales y políticas, para impedir que las clases populares pudieran manifestar, entre otros reclamos, su repudio a dicha hegemonía continental.

El gobierno de Onganía, además de proscribir a todos los partidos políticos y suprimir la autonomía universitaria, inició una escalada de intervenciones sobre los sindicatos con el fin de desactivar progresivamente la negociación colectiva. Estas agresiones autoritarias, tensaron a tal punto el conflicto social, que sólo dejaron margen para una resolución violenta del mismo.

En la primera etapa de oposición a la dictadura militar, cuando la negociación colectiva fue clausurada por el gobierno, los trabajadores asalariados empezaron a movilizarse, para resistir los embates contra sus derechos sociales, civiles y políticos. En un segundo momento, cuando se agrava el conflicto social y se producen las insurrecciones de masa lideradas por la clase obrera, es cuando surgen organizaciones de militantes que abrieron en la historia reciente de nuestro país, *la experiencia colectiva de la lucha armada*, como forma complementaria o superior –según las interpretaciones- de la lucha de masas.

En ese período de nuestra histórica, la lucha armada dejó de ser una expresión marginal y se convirtió en fenómeno político. Sus antecedentes se remontan a la militancia de la

resistencia peronista, la que se vio forzada a desarrollar prácticas de lucha clandestina por la legalidad que se le negó a las mayorías populares, debido a la proscripción política que a partir de la “revolución libertadora” pesó sobre el movimiento peronista. Una de las primeras experiencias de guerrilla rural, se desarrolló en Tucumán, con el copamiento de la Comisaría de Frías en 1959, que fue una iniciativa de un grupo de militantes peronistas denominado “Uturuncos”, cuya existencia fue breve.

Quizá, el saldo más importante que dejó la lucha de resistencia y que constituyó una demostración de lo que esa experiencia significó como crecimiento político para las clases populares, fue la emergencia de esa nueva generación de militantes de origen obrero y de clase media fogueados en prácticas clandestinas.

Como parte de esa generación, están los diversos grupos de militantes que formaron la Juventud Peronista, cuyo referente ideológico más destacado fue John William Cooke. De esa militancia, el denominado “grupo de Corrientes y Esmeralda”, fue el más emblemático, entre otros motivos por su protagonismo activo en las acciones de resistencia de 1957. Entre los miembros que formaron esa agrupación, encontramos a Gustavo Rearte, Carlos Caride y Jorge Rulli, quienes tuvieron la iniciativa de promover el primer intento de unificación de la Juventud Peronista con la formación de su Mesa Ejecutiva en 1959. Ese año, fue decisivo para la resistencia peronista, ya que se produce el hecho insurreccional más trascendente de ese período, con la ocupación del Frigorífico Lisandro de la Torre. Este hecho, reactivó la movilización obrera hasta 1963, la que fue acompañada por operativos de acción directa, cuyos protagonistas principales, fueron entre otros, los militantes de esa Juventud Peronista.

Cuando en 1963 fueron liberados los presos del Plan Conintes, se reanuda el proceso de constitución del Movimiento de la Juventud Peronista (MJP) que había quedado inconcluso. En octubre de 1963, en el Hotel de la Asociación Obrera Textil de Huerta Grande –Córdoba-, se produce el primer congreso de carácter nacional de la Juventud Peronista, que dio origen a su primera conducción. Entre los miembros de su mesa nacional de conducción, se encontraban, Envar El Kadri (Bs.As.), Saturnino

Aranda (Rosario), Valdés y Meza (Córdoba), Figueroa (Tucumán) y Armando Jaime (Salta)².

Esta primera conducción nacional del MJP, entró en conflicto con sus propias bases militantes, habituadas a prácticas insurreccionales y a rechazar toda imposición burocrática proviniera del aparato gremial o político. Este conflicto al interior de la JP, transcurrió cuando estaba en auge el vandomismo. Esta situación conflictiva al interior del MJP, entre la dirigencia y sus bases, creó condiciones para que surgieran diferentes reagrupamientos de militantes con posiciones antiburocráticas. Destacándose entre ellos, la Juventud Revolucionaria Peronista (JRP), conducida por Gustavo Rearte, que fue un protagonista clave para el armado del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) que se constituyó en 1964. Esta iniciativa de organizar el MRP, contó con el apoyo de Perón, ya que le permitió contrarrestar el peso adquirido por el vandomismo, que en esos tiempos empezaba a disputarle su liderazgo. Es la época del famoso Congreso de Avellaneda, en el que Vandom sostuvo que “hay que estar contra Perón para salvar a Perón”.

El libro de Pérez y Duhalde, mencionado en párrafos anteriores, sostiene que el aporte teórico que la JRP –Gustavo Rearte- hizo al Programa del MRP, fue haber introducido al interior del peronismo la primera fundamentación de la lucha armada. En el punto octavo de dicho Programa³, se puede apreciar el argumento fundacional de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP).

Ya entrada la década del sesenta, en 1964, encontramos otro antecedente de guerrilla rural, esta vez ligado al modelo revolucionario cubano y al pensamiento político-militar de Fidel Castro y Ernesto (Che) Guevara, que fue la experiencia de Orán -localidad

² Duhalde Eduardo L. y Pérez Eduardo M., “De Taco Ralo a la alternativa independiente”, Pág. 44, Ed. De la Campana, Ciudad de La Plata (Argentina), 2003.

³ Punto 8º, del Programa del MRP: dice “Que el enemigo, aunque aparentemente poderoso, en realidad es débil. El régimen, que solamente representa a doscientas familias privilegiadas, es un gigante con pies de barro. Nosotros somos millones y cuando nos pongamos en marcha no habrá fuerza capaz de detenernos, en la medida en que esclarezcamos nuestros objetivos, nos organicemos para la acción y pongamos en práctica todas las formas de lucha. Para ello el pueblo deberá oponer al ejército de ocupación del régimen, sus propias fuerzas armadas y las milicias obreras que le permitan conquistar la victoria y defenderla después”.

salteña- del Ejército Guerrillero del Pueblo comandado por Jorge Masetti ⁴, también de corta duración. Ese mismo año de 1964, tuvo lugar en Capital Federal en Plaza Irlanda, una de las acciones comando que dio origen a la guerrilla urbana, protagonizada por un grupo de militantes peronistas de Tacuara ⁵, hecho conocido como el “asalto al Policlínico Bancario”.

La crisis de los ingenios azucareros y el estado de movilización contra la dictadura militar de Onganía en que se encontraba la FOTIA (trabajadores azucareros), convirtió a Tucumán en un escenario especial para establecer la guerrilla rural. Por eso, para 1968 en Taco Ralo, localidad ubicada al sur de Tucumán, las Fuerzas Armadas Peronista (FAP) establecieron su campamento, cuyo propósito era realizar acciones preparativas para un posterior ascenso a la sierra del Chacuna, para iniciar desde ahí sus primeras operaciones militares. Este campamento al ser descubierto por gendarmería, fue cercado y los militantes que se encontraban en el mismo fueron encarcelados⁶.

Para abordar el análisis histórico de la militancia popular que eligió el camino de la lucha armada y que nutrió a organizaciones como las Fuerzas Armadas Peronistas y Montoneros, además de las explicaciones basadas en el agravamiento del conflicto social que fue regulado violentamente por el gobierno de Onganía, existieron otras dos cuestiones a tener en cuenta: el significado adquirido por el nacionalismo revolucionaria en Latinoamérica, para la década del sesenta; y el nuevo compromiso evangélico con los pueblos del tercer mundo que asumió la militancia cristiana a partir del papado de Juan XXIII.

⁴ Jorge Masetti fue un periodista argentino que siguió los pasos del Che en la revolución cubana, estuvo entre los fundadores de la agencia de noticias Prensa Latina. Algunos autores consideran que su breve experiencia guerrillera en Orán fue un anticipo de lo que luego intentaría el Che en Bolivia.

⁵ Tacuara, fue una organización de jóvenes de clase media, originariamente influenciados por diferentes versiones del pensamiento nacionalista católico. Cuando se incorporan a Tacuara, jóvenes provenientes de barrios populares, identificados con la resistencia peronista y con lecturas de textos de Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Jose M Rosa, J.J.Hernández Arregui, Rodolfo Puiggrós, etc, además de ser admiradores de la lucha de liberación de Argelia y de la Revolución Cubana, se formó el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT), cuyo jefe fue Joe Baxter, quién más tarde integró las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entre otros miembros del MNRT, se encontraban, Jorge Caffati, que más adelante integró las FAP, y José Luis Nell, posteriormente militante de Tupamaros y Montoneros.

⁶ Envar El Kadri, Amanda Peralta, Néstor Raúl Verdinelli, José Luis Rojas, Hernán Ceferino Laredo, Benicio Ulpiano Pérez, Edgardo Olivera, David Ramos, Orlando Tomás, Juan Luis Lucero, Hugo E Petenatti, Samuel L. Slutzky, Arturo Ferré Gadea y Orlando Skimerman.

El nacionalismo revolucionario de la década del sesenta, fue una ruptura con el nacionalismo liberal autoritario de figuras como Leopoldo Lugones, con el nacionalismo “aristocrático” de escritores como Rodolfo Irazusta, y también con las versiones nacifacistas criollas. El nacionalismo revolucionario no fue exclusivo de nuestro país, su espacio de desarrollo fue toda Latinoamérica. Pero en Argentina, se reconoce en la tradición del revisionismo histórico de Ernesto Palacios y José María Rosa, como en el legado anticolonialista de Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche. Siendo John W Cooke el mejor discípulo de esta tradición, convirtiéndose por su militancia peronista, en la bisagra intelectual que articuló el nacionalismo popular anterior a 1955 con el nacionalismo revolucionario de los años sesenta.

Las luchas de liberación de los pueblos del tercer mundo contra las diversas formas de colonialismo –las tradicionales y neocoloniales-, se convirtieron en paradigma del nacionalismo revolucionario de la década del sesenta. En países periféricos como el nuestro, donde existieron procesos de industrialización sustitutiva, la clase obrera por su pertenencia a una sociedad neocolonial, fue nacionalista. Pero su nacionalismo no fue oligárquico, ni burgués, sino revolucionario. El nacionalismo revolucionario de la clase obrera, confrontó políticamente con las distintas versiones “nacionalistas” que propiciaban la conciliación de clases, como las versiones seudodemocráticas y las burocrático autoritarias. El escenario de fondo donde se desarrolló el nacionalismo revolucionario de nuestro país, fue el de los gobiernos ilegítimos que se sucedieron a partir 1955, donde la mayoría popular del peronismo estuvo proscrita. Por eso, el nacionalismo revolucionario de los sesenta, fue peronista, y dentro del peronismo significó una alternativa de izquierda, ya que no propiciaba la conciliación de clases, sino terminar con el sistema de explotación que representaba el capitalismo dependiente.

Para fines de la década del cincuenta, dos acontecimientos que se produjeron casi simultáneamente, demostraron ser más adelante, los hechos más representativos de una época de importantes cambios. Con sólo tres meses de diferencia, el 28 de octubre de 1958, acontece primero la asunción de Juan XXIII como nuevo pontífice de Roma, y luego, el primero de enero de 1959, Fidel Castro encabezando las fuerzas militares del Movimiento 26 de Julio, derrotaba a la dictadura de Fulgencio Batista e iniciaba el proceso de la Revolución Cubana.

Durante la década del sesenta, la iglesia católica latinoamericana, experimentó cambios trascendentes en su compromiso evangélico, al definir su opción por los pobres y su solidaridad por la lucha anticolonial que libraban los pueblos del tercer mundo. En la Encíclica de Juan XXIII “Mater et magistra” de 1961, aparece una fuerte crítica al capitalismo, como sistema responsable de las desigualdades de clase, de la pobreza y de la injusticia social en el mundo. En esta encíclica, se ahondan definiciones frente a la cuestión social. Y para 1963, en la Encíclica “Pacem in terris”, con el propósito de crear condiciones de encuentro entre diferentes actores comprometidos con un cambio social de signo emancipador, Juan XXIII promovía el “diálogo entre cristianos y marxistas”. En nuestro país, durante el año 1964, fueron muy frecuentes estos encuentros entre cristianos y marxistas. En ellos participaron principalmente, militantes de la democracia cristiana, del peronismo y de diferentes sectores de izquierda. Dos temas concentraron el debate de esos encuentros, el perfil estructural que debía tener una sociedad más justa y el camino político para alcanzar dicha meta. En relación a éste último punto, existía un consenso bastante amplio, acerca de la inviabilidad en las sociedades periféricas para realizar cambios progresistas a través de gobiernos “democráticos liberales”. También existían bastantes coincidencias, sobre la necesidad de oponerse a partir de la lucha de masas a toda forma de dictadura cívico militar. Donde aparecieron planteos diferentes, fue sobre la lucha armada, aunque todos simpatizaban con la Revolución Cubana y con la lucha de liberación librada por el pueblo argelino.

Frente a éste panorama de cambio que representaba la “iglesia de los pobres”, la cúpula eclesiástica argentina se opuso a éste nuevo rumbo evangélico. Esa oposición de la jerarquía eclesiástica, se organizó promoviendo el “movimiento cursillista”, que fue el refugio del conservadorismo católico. La función de los denominados “cursillos”, consistió en bloquear toda iniciativa de reforma progresista, evitando oponerse a la autoridad papal, pero tratando que los cambios no traspusieran el plano de lo formal. Estos “cursillos”, también cumplieron la función de construir consensos corporativos, convirtiéndose en muchos casos, en espacios donde se reclutaron apoyos para el Partido Militar y para el golpe de Estado de 1966.

La corriente católica progresista que representó la “iglesia de los pobres”, tuvo sus referentes, en el obispo auxiliar de Córdoba Monseñor Angelelli, en los curas cordobeses José Gaido, Nelson Dellaferrera, Erio Vaudagna, Elvio Alberione, en sacerdotes de Buenos Aires como Carlos Mugica, Hernán Benitez, Rodolfo Ricchiardelli, Jorge Breñaza, Jorge Azur, etc. Todos ellos, compartían el nuevo mensaje evangélico que surgía de la Encíclica *Populorum Progressio* que resultó del Concilio Vaticano II, que propugnaban la solidaridad con los pobres y la igualdad social, pero que además condenaba las formas de depotismo originadas en sociedades injustas, considerando legítima la rebelión de los pueblos contra toda forma de “tiranía prolongada”. Casi simultáneamente con la Encíclica *Populorum Progressio*, en 1967, un conjunto de Obispos elaboran un documento ratificando el rumbo evangélico trazado por el Concilio Vaticano II, constituyendo a partir de ahí el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. En Latinoamérica, el reconocimiento evangélico de la legitimidad que tienen los pueblos cuando se rebelan contra las diversas formas de explotación y de gobiernos tiránicos, aparece mejor explicitada en la Conferencia de Medellín (Colombia) del Episcopado Latinoamericano, en 1968, cuando en uno de sus documentos se reivindica “la justa violencia de los oprimidos”. La teología de la liberación, como se denominó a esta visión de la Iglesia a favor de la emancipación de los pueblos del tercer mundo, tuvo un sector que asumió el compromiso evangélico con los pobres a partir de la lucha armada, cuyo representante más emblemático fue el sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres.

El nacionalismo revolucionario, la teología de la liberación y la reformulación de la teoría de la lucha de clases en la periferia a partir de la revalorización marxista de la cuestión nacional, constituyeron influencias decisivas para la aparición de las organizaciones armadas populares. Antes, desde comienzo de la década del sesenta, estas tres corrientes ideológicas fueron un factor de articulación política entre la militancia peronista, la proveniente del cristianismo y la izquierda nacional, que habían iniciado un proceso de ruptura con la cultura hegemónica del liberalismo.

Estos hechos históricos, revelaron el resquebrajamiento de una cultura política hegemónica reinstalada en 1955 y que se hallaba en pleno proceso de decadencia. Las tres corrientes ideológicas descriptas en el párrafo anterior, fueron decisivas para el

fenómeno de nacionalización y radicalización social de los sesenta, que tuvo como protagonista central a la militancia de origen obrero y de clase media. Así, espacios sociales y políticos tradicionalmente enfrentados, luego de las experiencias vividas por la ciudadanía a partir de 1955, de gobiernos seudodemocráticos y de dictaduras cívico militares, empezaron a converger políticamente a partir del cuestionamiento a esas formas ilegítimas de gobiernos a través de movilizaciones opositoras, impulsadas desde las huelgas obreras e insurrecciones populares como el Cordobazo. De ese proceso de ascenso de la lucha de masas, surgió una militancia con nuevas concepciones y metodologías de acción, siendo parte de ella, aquella que optó por el camino de la lucha armada.

Hasta ahora, el debate sobre el origen de las organizaciones guerrilleras en nuestro país, se refirió a si la lucha armada tuvo sus origen en focos militantes o fue consecuencia del ascenso de la lucha de masas. La posición que se sostiene en este trabajo, es que fue consecuencia del ascenso de la lucha de masas, y que esta última se desarrolló en nuestro país en el sentido de la periferia al centro.

En los años sesenta, el proceso de auge de lucha de masas y de emergencia de cuadros populares, se desarrolló en el sentido de la periferia al centro. Las puebladas del interior del país, fueron claves en el jaqueó a la dictadura militar y constituyeron la experiencia social donde se recreó la militancia popular. Esta hipótesis, de explicar la emergencia de una nueva generación de militantes a partir del crecimiento que tuvo la lucha de masas desde la periferia al centro, es verificable en los casos de organizaciones guerrilleras como el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros.

Esta relación entre ascenso de la lucha de masas y crecimiento de las organizaciones armadas, según la coyuntura y situación de relación de fuerza que se trate, contenía a su vez otro debate, acerca de la modalidad de relación que debía existir entre la dimensión política y la militar. Existiendo dos tendencias dentro de la militancia para interpretar las contradicciones que se abrían entre estas dos dimensiones, la posición foquista que privilegiaba la instancia de la vanguardia militar y la movimientista que ponía énfasis en la política de masas.

Cuando en 1964 se puso en marcha en todo el país el Plan de Lucha de la CGT, que incluyó huelgas y ocupaciones de fábricas, el mismo contó con el apoyo de laicos y sacerdotes católicos de Córdoba identificados con la nueva visión evangélica que surgía del Concilio Vaticano II. Cincuenta sacerdotes cordobeses y algunos pocos miembros de la cúpula eclesiástica, como el Obispo auxiliar Monseñor Angelelli, expresaron su solidaridad con esta iniciativa del movimiento obrero. No ocurrió lo mismo con la jerarquía eclesiástica y los católicos conservadores de esa provincia, quienes repudiaron la actitud solidaria tomada por los sectores renovadores.

El ascenso de la lucha social y el desencantamiento de la ciudadanía de los gobiernos que se habían sucedido a partir de 1955, abrieron un proceso de cambio en la conciencia popular, denominado por muchos autores como “peronización de los sectores medios”. En 1964, simultáneamente con el plan de lucha de la CGT, se produjo la movilización política por el retorno del Gral. Perón. En Córdoba, quienes realizaron su militancia entorno de la Parroquia Cristo Obrero y luego extendieron sus trabajos de base a otras parroquias, constituyen un buen ejemplo de ese proceso sociocultural de “peronización”. Para el año 1967, gran parte de esa militancia se identificó con el peronismo revolucionario, lo que llevó a la formación de la Agrupación Peronista Lealtad y Lucha ⁷.

Cuando “Lealtad y Lucha” priorizó la militancia fabril, durante 1968, pasó a denominarse Peronismo de Base (PB). Las agrupaciones y los delegados de base del PB, que crecieron en la etapa de formación de listas gremiales antiburocráticas principalmente en el SMATA (mecánicos) y la UOM (metalúrgicos), integraron la Regional Córdoba de la CGT de los Argentinos.

Otra agrupación vinculada al mismo proceso, con un desarrollo similar en el ámbito universitario, fue la Agrupación de Estudios Sociales de Córdoba (AES), que para 1968 lideraba la Federación de Asociaciones Estudiantiles de la Universidad Católica de Córdoba, entre cuyos militantes se encontraban, María Leonor Papaterra (Filosofía y

⁷ Vélez Carreras Ignacio, “Montoneros. Los grupos originarios”, Pág. 4, Revista Lucha Armada, Año 1 N°4, Bs.As., 2005.

Letras), Jorge Raúl Mendé (Medicina), Mariano Pujadas (Agronomía), Gerardo Conte Grand (Derecho) y Claudio Ehrenfeld (Ciencias Económicas)⁸.

La militancia de la Provincia de Santa Fe, también fue impactada por el Plan de Lucha de la CGT del año 1964. La Agrupación Ateneo de Santa Fe - cuyo origen fue el movimiento universitario humanista- conjuntamente con el integralismo cordobés, a partir de los mandatos que surgieron de las Asambleas Universitarias, protagonizaron la ocupación de facultades, que fue la forma de solidarizarse con la lucha del movimiento obrero.

Dentro del Ateneo de la Universidad Nacional del Litoral, la agrupación que lideró las movilizaciones estudiantiles y encabezó el proceso ideológico hacia el “peronismo revolucionario”, fue la de la Facultad de Ingeniería, entre cuyos militantes se encontraban Mario Ernst, Osvaldo Agustín Cambiaso, Ricardo René Haidar, Roberto Pirlés y otros. En una etapa posterior, este grupo tuvo la iniciativa de formar las primeras unidades clandestinas de lucha armada de Santa Fe. En un principio se integraron a las FAP, para luego formar parte del proceso de construcción de Montoneros⁹.

El cierre de Ingenios azucareros como resultado de la política económica del gobierno de Onganía, afectó también al norte santafecino. Como fue el caso del cierre del Ingenio Arno de Villa Ocampo, en abril de 1969. Pero éste no fue el único conflicto provocado por la dictadura militar en esa zona. Los otros casos fueron, el cierre de los talleres ferroviarios de Las Galleretas y Villa Guillermina, que agravaron la situación conflictiva. El 11 de abril, se realizó una movilización de protesta, denominada “Marcha por la defensa del Norte”, donde participó el grueso de la militancia que desarrollaba trabajos de base y que tenía como referente al padre Rafael Yacuzzi.

Raimundo Ongaro que lideró a nivel nacional la CGT de los Argentinos y el padre Yacuzzi, estuvieron al frente de la marcha cuyo destino era la Capital Federal. La marcha fue reprimida violentamente en Villa Ocampo, lo que provocó una pueblada. Esta experiencia de lucha, ayudó a consolidar al grupo de militantes cristianos que

⁸ Lanusse Lucas, “Montoneros. El mito de sus doce fundadores”. , Pág. 106, Ed. Vergara, Bs.As., 2007

⁹ Ibid, Pág. 115

desarrollaba su práctica de base entorno de la capilla de Santa Ana a cargo del padre Yacuzzi y también de aquellos que realizaban su actividad pastoral en Reconquista orientados por el padre Arturo Paoli. La participación activa de esta militancia en las diferentes movilizaciones sociales del norte santafecino, los llevó a definirse políticamente por el “peronismo revolucionario”. En este proceso de lucha crecieron nuevas experiencias militantes, como fue el caso del grupo liderado por Roberto Cirilo Perdía y Hugo Medina.

En julio de 1967, entre los diferentes encuentros de militantes populares que se hicieron en todo el país a raíz de la convocatoria al primer congreso de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad) a realizarse en La Habana, se reunieron en Quilmes representantes de agrupaciones peronistas provenientes de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y otras localidades del interior, entre los que se encontraban varios de los nucleamientos que posteriormente se integrarían a las FAP y más adelante darían origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Descamisados y Montoneros.

En los diferentes encuentros de militantes que coincidían en la necesidad de la lucha armada, realizados durante 1967 en todo el país, aparecieron dos tendencias, la foquista y la movimientista. Incluso, sería más correcto hablar de tres tendencias, ya que dentro del foquismo se podría reconocer otra apertura, entre aquellos que concebían al foco como vanguardia política y quienes sólo lo veían como una alternativa militar. En los años posteriores, estas diferentes posiciones, no fueron sostenidas siempre por los mismos militantes. Según los cambios de coyuntura y los cambios que se producían dentro de cada coyuntura, variaban las posiciones en la militancia. Muchos que habían sostenido posiciones foquistas en determinado momento, al cambiar la coyuntura, pasaban a sostener posiciones movimientistas, y viceversa. También estaban aquellos que eran indiferentes a los cambios que se producían en la realidad y siempre planteaban lo mismo.

Tanto para aquellas posiciones denominadas foquista, que adscribieron al supuesto de que la práctica armada actuaba como foco generador de conciencia, al demostrar la vulnerabilidad del enemigo, y que dicha concepción además incluía el supuesto vanguardista, de que una estructura de cuadros es la mejor garantía para acortar los tiempos de la revolución. Como para aquellas otras posiciones, que consideraban que el

accionar armado debía estar subordinado a la práctica insurreccional de las masas populares. Tanto para unos, como para otros, la revolución cubana era reconocida como modelo de referencia.

En este debate entre estas dos tendencias, fue ganando espacio una posición que no necesariamente cristalizó en determinada organización armada, sino que cortó transversalmente a las mismas. Esta posición sostenía que el accionar de guerrilla por su misma naturaleza de ser una lucha de desgaste, debía ser una práctica prolongada, para que las masas populares paulatinamente la fueran incorporando y articulando con su práctica insurreccional, para plasmar entre ambas una estrategia de guerra popular prolongada. Por eso, se la consideró como la vía más adecuada para debilitar progresivamente las fuerzas de un enemigo superior en recursos, ya que a través de su desgaste y el desarrollo de la fuerza propia, se suponía que era posible cambiar la correlación de fuerza y así poder vencerlo en una situación más favorable. El hecho de que éste punto de vista no llegó a homogeneizar a las diferentes organizaciones armadas, quizá sea una parte de la explicación, para comprender el motivo de su derrota militar.

Esta polémica estuvo presente en los dos Congresos del Peronismo Revolucionario que se realizaron a fines de 1968 y principios de 1969. Dos autores especializados en la historia de Montoneros, Ricardo Gillespie y José Amorín, han coincidido en la interpretación sobre lo ocurrido en dichos eventos. Entre las presencias más destacadas del Congreso de 1968, se encontraban, Bernardo Alberte que hasta poco tiempo antes había sido delegado personal de Perón, John W Cook que en esa época fue representando a Acción Revolucionaria Peronista (ARP), sindicalistas como Jorge Di Pasquale (Farmacia) y Ricardo De Luca (Navales), Gustavo Rearte (Juventud Revolucionaria Peronista y MRP), etc. Todos reconocían que la proscripción de los partidos políticos y la escalada represiva sobre las organizaciones sindicales y el movimiento estudiantil, como también sobre otras formas de representación sectorial, al cerrar las posibilidades de expresión de las clases populares, legitimaba a las mismas para que pudieran manifestarse a través de formas no convencionales, como la lucha armada. Las diferencias que aparecieron en el debate, se referían a “si estaban dadas o no las condiciones objetivas y subjetivas” para que la lucha armada pudiera desarrollarse y sustentarse durante un tiempo prolongado.

Este debate del peronismo revolucionario, continuó en enero de 1969, cuando se realizó una convocatoria más amplia. Como síntesis de las discusiones de ese Congreso, recuperamos el artículo escrito por uno de los participantes, Carlos Hobert, testimonio que rescata José Amorín ¹⁰ en su libro, y que dice: “De este Congreso salen tres posiciones. Una que sustentaba fundamentalmente el Movimiento Revolucionario Peronista y que sostenía la necesidad de profundizar la organización de la clase trabajadora y que mientras esas condiciones no estuvieran dadas no se podía iniciar la lucha en el plano militar. La segunda posición sostenida por los sindicalistas que proponían el fortalecimiento de la estructura sindical, fundamentalmente de la CGT de los Argentinos que en aquel entonces era el único foco de resistencia real que había en el seno del movimiento peronista y la clase trabajadora, pero más allá de eso nada...La tercer posición sostenida por José Sabino Navarro, era que se hacía necesario lanzar la lucha armada para crear esas condiciones de conciencia y organización del pueblo peronista.” Como conclusión de ese Congreso, seleccionamos la descripción que realiza Gillespie en su libro y que coincide con el relato de Holbert, “Finalmente, la conferencia apoyó la línea defendida por Sabino Navarro y sus colegas, aunque, para la mayoría de los participantes, tal compromiso no fue más que retórico” ¹¹. Aclarando Holbert, acerca de éste punto, en el cierre del Congreso, que: “La posición del negro (Sabino Navarro) fue la de la mayoría. Pero si bien se estaba de acuerdo con llevarla adelante, no se hacía. Entonces nosotros sacamos una consigna que provenía del peronismo que decía mejor que decir es hacer”. Y el agregado final que hace Amorín, que tiene importancia pues se refiere al origen del “grupo Sabino”, al cual perteneció, dice así: “...durante el Congreso se pusieron de acuerdo Sabino Navarro, Gustavo Lafleur y se organizó el grupo armado después conocido como “grupo Sabino”, una de las pequeñas organizaciones que dio origen a Montoneros” ¹².

El protagonismo de Sabino Navarro en los debates de los diversos encuentros organizados por el peronismo revolucionario, no fue casual, ya que significaba el reconocimiento a su trayectoria sindical. Había sido miembro de la Comisión Interna de la fábrica Deutz Cantábrica (DECA). Luego de que Dirk Kloosterman asumiera como

¹⁰ Número 4 de la Revista “La causa peronista”, Bs. As. , agosto 1974.

¹¹ Gillespie Ricardo, “Soldados de Perón. Los Montoneros.”, Pág. 117, Ed. Grijalbo, Bs. As., 1998.

¹² Amorín José, “Montoneros: La buena historia.”, Pág. 102 (100/101), Ed. Catálogos, Bs. As., 2006.

Secretario Gral. del SMATA (mecánicos y afines), durante 1969, Sabino Navarro desarrolló una práctica crítica hacia la burocracia del gremio, a la que responsabilizó de boicotear huelgas y de ser cómplice del despido de los compañeros más activos, como más tarde le sucedió a él, cuando fue despedido de DECA por la patronal en complicidad con la burocracia del gremio¹³. Además, como señalamos antes, Sabino Navarro también fue la cabeza de una de las proto-organizaciones constructoras de Montoneros, entre cuyos miembros se encontraban, Hilda Rosemberg, Gustavo Lafleur, Carlos Holbert, José Amorín, Juan Carlos Falaschi y otros. Esta trayectoria como militante sindical y como referente de esa nueva generación que se núcleo entorno del peronismo revolucionario, muestran el origen obrero de quién lideró a Montoneros luego del asesinato de Fernando Abal Medina.

Otro espacio de la militancia del peronismo revolucionario que coincidió con la posición de Sabino Navarro, fue el Comando Camilo Torres, en particular los grupos de Córdoba y de Buenos Aires, respectivamente conducidos por Emilio Maza y Fernando Abal Medina. La agrupación que tenía como principal referente a Emilio Maza, provenía del integralismo, y había participado en el año 1966 en las protestas estudiantiles en repudio a la intervención militar en la universidad. Esta agrupación, no coincidió con la perspectiva basista que compartía la mayoría de la militancia de origen cristiano, ya que consideraba que la prioridad de la etapa era la lucha armada. Esa fue la causa que llevó a ese grupo a vincularse con el Comando Camilo Torres conducido por Juan García Elorrio. En cuanto a Fernando Abal Medina, Gustavo Ramus y Mario E Firmenich, provenían también de la militancia cristiana, cuya experiencia más significativa fue la que compartieron con el sacerdote Carlos Mugica, durante el año 1966, cuando incursionaron como misioneros en Tartagal (Salta). Ese mismo año, participaron activamente de la Revista “Cristianismo y Revolución” dirigida por Juan García Elorrio, experiencia esta última que le permitió vincularse con el peronismo revolucionario. Durante los primeros meses de 1970, luego de separarse de García Elorrio, estos dos grupos inician una serie de acciones armadas que tenían el propósito de obtener una infraestructura básica a nivel nacional, que les permitiera sustentar una lucha armada de carácter prolongado. Operativos similares y con la misma finalidad, fueron realizados por el “grupo Sabino” y la organización asentada en el norte de Santa Fé.

¹³ Gillespie Ricardo, “Soldados de Perón. Los Montoneros.”, Pág. 116, Ed. Grijalbo, Bs. As., 1998.

Este conjunto de pequeñas organizaciones armadas, unidas por coincidencias políticas y metodológicas, y que para 1970 habían alcanzado una significativa coordinación operativa, acordaron respaldar la iniciativa del grupo conducido por Fernando Abal Medina para darse a conocer en el escenario nacional. El 29 de Mayo de 1970 se conmemoraba el primer aniversario del Cordobaza, y esa fue la fecha elegida por este conjunto de organizaciones para mostrarse ante la sociedad como Montoneros. El hecho político-militar planificado con tal propósito, respondía a un sentimiento político enclavado en lo más profundo de la tradición peronista y que representaba un acto de justicia reparador, anhelado por la militancia popular. Este hecho de fuerte carga simbólica, fue el secuestro y ejecución del Gral. Pedro E. Aramburu, quién había sido dictador de la “revolución libertadora” y principal responsable de los fusilamientos del 9 de junio de 1956 (donde fuera asesinado el Gral. Juan José Valle, y otros militantes civiles y militares del peronismo), del secuestro y desaparición del cadáver de Eva Perón, de la destrucción de gran parte de la legislación protectora de los trabajadores y de la proscripción y represión del movimiento peronista. El Comando Juan José Valle de Montoneros, fue el que tuvo a su cargo la realización de esa operación político militar. El relato pormenorizado de ese acontecimiento, fue descrito por Norma Arrostito y Mario E Firmenich, en un reportaje periodístico realizado por la Revista “La causa peronista” de setiembre de 1974 (número nueve). En el Comunicado N° 5 donde se anuncia la ejecución de Aramburu, es presentada en estos términos la organización Montoneros: “Nuestra organización es una unión de hombres y mujeres profundamente argentinos y peronistas, dispuestos a pelear con las armas en la mano por la toma del poder para Perón y su Pueblo y la construcción de una Argentina justa, libre y soberana”.

Para 1966, núcleos de militantes provenientes del Partido Socialista de Vanguardia y disidentes del Partido Comunista, en parte continuadores de la experiencia del “Ejército Guerrillero del Pueblo” de Jorge Masetti en Orán, ligados al Che Guevara en Bolivia, conformaron el “Ejército de Liberación Nacional”. Luego del asesinato del Che por tropas del ejército Boliviano, como señaló Carlos Olmedo – Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)- en un reportaje que le hiciera la Revista “Cristianismo y Revolución”, la situación de la pequeña organización era la de una “patrulla extraviada”. A partir de ahí, el grupo inicia un proceso de relectura de la

historia de la lucha de clases en nuestro país, identificándose con pensadores peronistas como J. J. Hernández Arregui, Rodolfo Puiggrós, José María Rosa y Rodolfo Ortega Peña. Durante ese proceso autocrítico, que los llevó a revalorizar al peronismo como movimiento de liberación nacional, se formaron las denominadas proto-FAR. En el año 1969, en ocasión de la visita de Nelson Rockefeller al país, enviado como representante del Presidente de Estados Unidos, las proto-FAR realizan su primera operación armada, incendiando trece supermercados de la cadena “Mínimax”, cuyo propietario era el mencionado Rockefeller. Entre los miembros que formaban la conducción de las FAR, además de Carlos Olmedo, encontramos a Juan Pablo Maestre, Marcos Osatinsky y Roberto Quieto. En julio de 1970, hace su aparición pública las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FAR-, con el campamento de Garín, localidad situada a 27 Km. de la Capital Federal, demostrando en el operativo una alta destreza militar. Durante 1973, FAR, “Descamisados” y Montoneros, formaron parte del proceso de fusión de la mayoría de las organizaciones armadas peronistas.

La otra organización de lucha armada peronista, que operó principalmente en zona norte y oeste del Gran Buenos Aires, fue “Descamisados”, que tuvo como jefes a Horacio Mendizábal y Norberto Habegger. Sus integrantes procedían de la militancia cristiana y del peronismo revolucionario. Su comienzo, tuvo que ver con trabajos barriales y estudiantiles. Y en una etapa de mayor desarrollo político de esta organización, apoyaron y formaron parte de las comisiones de base sindicales de carácter antiburocráticas.

Dentro del espacio de izquierda, la organización armada que alcanzó mayor desarrollo fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo. El PRT – ERP tuvo su origen en la fusión de dos agrupamientos militantes, el Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP) y Palabra Obrera (PO)¹⁴. El FRIP se fundó en 1961 y núcleo a trabajadores y estudiantes del noroeste argentino, entre los miembros de su dirección estuvieron los hermanos Santucho – Francisco René y Mario Roberto -, su escenario de acción fueron las provincias de Santiago del Estero (de

¹⁴ Su origen fue el Partido Obrero Revolucionario (POR) que conjuntamente con militantes obreros peronistas, formaron en el año 1957 el Movimiento de Agrupaciones Obreras (MAO), cuyo órgano de difusión fue “Palabra Obrera”. Conociéndose éste grupo, a partir de ahí, con el nombre de su periódico, Palabra Obrera.

donde provenían los Santucho) y Tucumán. El otro agrupamiento el PO, fue una organización trotskista conducida por un militante de larga trayectoria, Nahuel Moreno, con un desarrollo organizativo importante en Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca, Tucumán y Rosario.

En 1964 concluye el debate entre el FRIP y el PO, con el acuerdo de formar una alianza transitoria hasta pulir sus últimas diferencias. El 25 de Mayo de 1965 producto de la fusión de estas dos organizaciones de izquierda se constituye el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)¹⁵. En los años 1966 y 1967, el PRT desarrolló una extensa acción movilizadora apoyando la lucha de la FOTIA (trabajadores de la industria azucarera) contra el cierre de los ingenios azucareros que llevaba adelante la dictadura de Onganía. Durante el año 1968, gran parte la militancia peronista y de izquierda, debatía sobre las posibilidades de la lucha armada en el país. Esta polémica hizo su impacto sobre el PRT, abriendo en su seno dos posiciones bien diferenciadas, la del sector de Nahuel Moreno que rechazaba la lucha armada y la del sector de los santuchos que consideraba que estaban dadas las condiciones para desarrollar dicha iniciativa. Así, para el año 1969, el PRT “El Combatiente” que encabezaba Mario Roberto Santucho comenzó a organizar la estructura armada, y en el Congreso del año 1970 del PRT quedan definidas las funciones del PRT como partido de cuadros y las del ERP como organización de combate de masas. Esta organización armada marxista eligió como escenario de acción, el centro y noroeste del país. Para el año 1973, cuando el PRT – ERP rompe con la “cuarta internacional”, se produce la escisión de un grupo de militantes que queda ligado a dicha internacional trotskista, formando el PRT fracción roja. Simultáneamente con esta separación y como consecuencia de la movilización preelectoral liderada por el peronismo, se produce otra escisión, esta vez hacia las organizaciones armadas peronistas, que es el llamado ERP 22 de Agosto conducido por Víctor Fernández Palmeiro.

CRISIS DE LA DICTADURA MILITAR

Las insurrecciones populares del interior del país, fueron un factor decisivo para el crecimiento del espacio opositor al gobierno de Onganía. El propio bloque de poder comenzó a desconfiar del “partido militar”, debido a las contradicciones que

¹⁵ Pozzi Pablo, “Por las sendas argentinas...El PRT-ERP”, Pág. 58, Ed. Imago Mundi, Bs. As., 2004.

aparecieron al interior del gobierno y a la ineficacia que demostró como garante de las relaciones sociales capitalistas. Cuando el gobierno quedó desacreditado frente a toda la sociedad, para evitar su caída, salió a buscar apoyos corporativos, para lo cual realizó algunas maniobras de cooptación gremial. Frente a esa manipulación oficial de la dirigencia sindical, Perón cuestionó y sugirió la expulsión del movimiento de aquellos sindicalistas y políticos que colaboraban con el gobierno, solidarizándose por otra parte con los sectores combativos, lo que hizo crecer como antítesis de esa opresión militar, la opción política más creíble para la clase trabajadora, que fue el peronismo y la reivindicación del retorno de su líder.

La militancia clasista, que había logrado construir en el interior del país una representatividad importante, en base a la combatividad y al antiburocratismo, al no comprender el resurgimiento del peronismo, fue ella misma la que se aisló políticamente y frustró su posibilidad de convertirse en una alternativa de masas. Otra cosa fue lo que ocurrió con la militancia del “sindicalismo de liberación”, que abrió al interior del peronismo el debate sobre la necesidad de profundizar el proyecto político popular.

Para descomprimir el conflicto social e intentar remontar la crisis del gobierno, entre otras iniciativas, Onganía dispuso un aumento de salarios y la creación del nuevo régimen de Obras Sociales. La primera medida, apuntó a recuperar rápidamente el apoyo de la dirigencia sindical, para conseguir cierto respaldo corporativo. La segunda medida, fue más ambiciosa, no se agotaba en conseguir una cooptación circunstancial de la dirigencia sindical, aspiraba a obtener compromisos corporativos más abarcativos que garantizaran formas de regulación entre capital y trabajo más duraderas. Sobre estos compromisos corporativos, en parte, fue que Lanusse imaginó la posibilidad de un proyecto continuista como el GAN (gran acuerdo nacional).

La corporativización de la seguridad social y el avance de la resistencia popular..

En 1967, el gobierno militar realizó una reforma del sistema previsional¹⁶, cuyo resultado fue una mayor desigualdad entre las jubilaciones y pensiones existentes. Con esa reforma, todas las cajas previsionales (13) se redujeron a tres: trabajadores del Estado, trabajadores autónomos y trabajadores privados. El sistema de privilegios dentro del sistema previsional, apareció con los regímenes especiales: Fuerzas Armadas y de Seguridad, trabajadores de las administraciones provinciales y municipales. Para regular el sistema previsional, se creó la Secretaría de Seguridad Social, que estableció las siguientes reformas: se suprimió la obligación de haber concluido el servicio activo para solicitar el beneficio provisional; se cambiaron los parámetros para establecer el haber y la movilidad, como también, los criterios de edad, años de servicios y aportes.

En 1970, se dejó sin efecto el decreto reglamentario 969/66 de la Ley de Asociaciones Profesionales, con el que se intentó atomizar al movimiento obrero y fue una de las causas de conflicto entre el gobierno y la dirigencia sindical. Entre las medidas, con las que se pretendió recomponer relaciones con la cúpula gremial, estuvo el lanzamiento del proceso de normalización de la CGT y el dictado de la Ley 18610/70 de Obras Sociales. Posteriormente, durante la gestión de Levingston, por iniciativa del Ministro de Economía Aldo Ferrer, se abrió el proceso de negociación de las convenciones colectivas de trabajo.

Luego del relevo de Levingston, en julio de 1971, Lanusse derogó el decreto de proscripción de los partidos políticos. La estrategia del GAN apuntaba a legitimar un candidato presidencial surgido del proceso militar, con cierto apoyo popular, para lo cual se pensó en una iniciativa que sirviera para consolidar el sistema de obras sociales y además generara adhesiones sociales desde la “tercer edad”, lo que se concretó con la creación del PAMI. *El sistema de obras sociales y el PAMI, constituyeron piezas institucionales claves del proceso de corporativización de las políticas sociales. Ya que a partir de los compromisos burocráticos que generaba ese proceso, se posibilitaba por una parte el desmontaje de las políticas sociales de carácter universal y por la otra se garantizaba la continuidad de la corporativización de las mismas. Es decir, el objetivo político de esta iniciativa de la dictadura militar, era seguir desmontando aquellas instituciones que garantizaron una ciudadanía democrática integral, para conseguir*

¹⁶ Leyes 18037 y 18038 de 1967.

un control más autoritario de esa ciudadanía a partir de los compromisos burocráticos y la corporativización de las políticas sociales.

La salud pública que fue una de las políticas sociales estratégicas del Estado de bienestar, empezó a ser desmontada desde 1955, profundizándose su precarización a partir de 1966. La Secretaría de Salud Pública durante el gobierno de Onganía, sufre una desjerarquización dentro del Estado, al convertirse en Subsecretaría. Con la Ley de Obras Sociales, sancionada en 1970, se inicia el proceso de reemplazo del sistema de salud pública por el sistema de obras sociales. Esta ley, otorgaba la administración de las obras sociales a los sindicatos, por otra parte creaba como estructura reguladora del sistema al Instituto Nacional de Obras Sociales. Así, *la problemática de la salud deja de ser concebida en el Estado como una política social de carácter universal, para pasar a ser vista como un “sistema de recursos sociales” administrado por “grupos intermedios” (sindicatos), con una “regulación estatal” dependiente de acuerdos corporativos (gremios, prestadores privados de salud y gobierno de turno).*

Para consolidar este sistema de obras sociales y el mercado de prestadores privados de salud, se crea la obra social de mayor magnitud - por su masa de afiliados, como por la cantidad de fondos administrados- el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Esta obra social, atendía al sector pasivo y a su grupo familiar. Los gremios estaban incorporados legalmente en los órganos de gestión del sistema.

Mientras avanzaban los planes oficiales de corporativización de las instituciones de bienestar y de conformación de compromisos burocráticos, con el propósito de establecer un proyecto político continuista para sortear la crisis del régimen. La movilización opositora a la dictadura militar, crecía, generando una radicalización en sus planteos reivindicativos. Los mismos expresaban avances en la conciencia social y política de las masas, que terminaban retroalimentando el propio proceso insurreccional. El impacto de estas movilizaciones sobre las fuerzas políticas populares, como el radicalismo y el peronismo, provocaron un vuelco hacia la izquierda en muchas de sus definiciones. La generación intermedia del radicalismo, liderada por Raúl Alfonsín y Enrique Vanoli, en 1970, en el informe que elaboraron para la Mesa Directiva de la UCRP, sostuvieron entre otros conceptos, que “La política

económica debe orientarse a terminar con todas las formas de privilegio, las oligarquías internas y el imperialismo.” Además el mismo documento reivindicaba “terminar con el bloqueo a Cuba”, proponiendo su ingreso al sistema interamericano. Por su parte, Perón, frente a las maniobras de cooptación sindical de Onganía, el 26 de diciembre de 1969 envía a través de su delegado personal Jorge D Paladino una cinta magnetofónica dirigida al Plenario Nacional de las 62 Organizaciones, en la que sugiere la expulsión de los “Ocho gremios participacionistas”¹⁷ aliados de Onganía. Es la época en que Perón en varios reportajes utiliza el concepto “socialismo nacional” y cuando se difunde su libro “La hora de los pueblos”. Poco tiempo después, Perón hizo conocer públicamente su solidaridad con las “formaciones especiales”, es decir, con las organizaciones armadas peronistas.

Luego del Cordobazo, el gobierno militar en crisis, profundizó la represión sobre los sectores combativos del sindicalismo, mientras abría una línea de negociación con los dirigentes dialoguistas. El propósito de Onganía fue conseguir el apoyo de la CGT nacional, para salir del aislamiento social en que había caído su gobierno. Para alcanzar ese objetivo, necesitó de una CGT dócil, controlada a partir de los compromisos corporativos que resultaron del otorgamiento del sistema de obras sociales.

La normalización de la CGT en 1970 estuvo precedida por la designación oficial de Valentín Suárez (interventor de AFA) como delegado normalizador de la CGT. Luego de dicha designación, la Comisión Directiva de la CGT de Azopardo renunció, dando lugar para que se conformara una Comisión Normalizadora de 20 miembros, en la que confluyeron dos tendencias: la vandorista, que tomó cierta distancia del gobierno, y la colaboracionista. En enero de 1970, se realizó una reunión de las 62 Organizaciones unificadas que reiteró su apoyo a la Comisión Reorganizadora y expulsó a los representantes de “los 8” sindicatos colaboracionistas.

Los logros de cooptación corporativa a medias (ya que el “grupo de los ocho” quedó fuera de la normalización), conseguido por el “onganiato”, no lograron sortear la crisis del régimen burocrático autoritario. El 8 de junio de 1970 la junta de comandantes exigió la renuncia de Onganía. A los pocos días que asumió Levingston

¹⁷ Los “Ocho”, formados por: Vicente Roqué, Fernando Donaires, Maximiliano Castillo, Juan Racchini, Jerónimo Izetta, Isidro Retondo, Sebastián Montoya y Enrique Chieza.

como jefe de gobierno, abriéndose de esa forma la segunda etapa de la dictadura militar, se reunió en Buenos Aires el Congreso normalizador de la CGT, que llevó el nombre de “Augusto T. Vandor”. La normalización de la CGT del 3 de julio de 1970, contó con el respaldo oficial, pero no benefició a los gremios participacionistas, ya que el resultado de dicho Congreso fue el triunfo de la ortodoxia de las 62 Organizaciones liderada por Lorenzo Miguel, quién consiguió imponer a José Ignacio Rucci - representando a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)- como Secretario General de la central obrera.

Como se señaló en el párrafo anterior, el relevo de la conducción del gobierno militar recayó sobre el Gral. Roberto M Levingston, quién hasta ese momento se desempeñaba en la Junta Interamericana de Defensa. Su gestión duró tan solo nueve meses y estuvo signada por conflictos a nivel de la cúpula militar, referidos al rumbo que debía tomar el gobierno. Estaba la posición que sostenía la necesidad de perpetuar el régimen, encabezada por el mismo Levingston, haciendo algunos retoques “proteccionistas” a la economía y dándole continuidad a las políticas de cooptación corporativa. Por otro lado, estaban aquellos que planteaban abrir la transición hacia un “gobierno democrático”, con el fin de garantizar institucionalmente la continuidad del régimen de acumulación y de la alianza de intereses que se había beneficiado del mismo.

A comienzos de la década del setenta, el principal movimiento de masas opositor a la dictadura militar provenía del interior del país. Durante 1971, la CGT de Córdoba llevó adelante 12 paros activos, con ocupación de fábricas, donde también aparecieron prácticas de lucha no convencionales. Esta forma de activismo, tuvo su manifestación más relevante en el “viborazo”.

En el año 1971, el gobierno de Levingston convocó a paritarias y abrió el proceso de negociación de nuevos convenios colectivos, con la promesa de otorgar mejoras sustantivas. El propósito del gobierno, fue descomprimir el conflicto social y rehacer vínculos con los gremios. La dificultad principal de ese intento de cooptación, fue la propia patronal, que no estaba dispuesta a otorgar mejoras significativas, cuando la situación para los trabajadores era dramática, ya que hacían tres años que estaban congelados los salarios. Esta situación, terminó agravando aún más el conflicto social.

Los obreros de la rama metalmecánica, para la época del gobierno de Levingston, tuvieron que enfrentar los planes patronales de racionalización dirigidos a incrementar la productividad en planta y a fortalecer la autoridad de los directivos en la línea de producción, recortando atribuciones a los representantes sindicales de base y por tanto debilitando el control obrero sobre el cumplimiento patronal de los derechos laborales. El incremento de los ritmos de producción en línea y la prepotencia de los directivos de fijar ellos solos dichos ritmos, fue uno de los factores del descontento obrero. Por eso, en las negociaciones colectivas de 1971 de SITRAC y SITRAM, los obreros reclamaron la eliminación de los incentivos, ya que el mismo era utilizado por la empresa como mecanismo de manipulación de los trabajadores para mantener bajo el salario básico y hacer crecer permanentemente la productividad incrementando la tasa de explotación, a lo que se le agregaba, las exigencias cada vez más estrictas sobre metas de calidad. Como alternativa al régimen de incentivo, la propuesta obrera fue incorporar las bonificaciones al salario básico y que el incremento de la productividad surgiera de la inversión empresaria en nueva tecnología y no en el crecimiento de la tasa de explotación. Otro reclamo paritario de los trabajadores, fue la participación obrera en el establecimiento de metas de producción y en el diseño del sistema de categorías.

Esta situación crítica, resultado de la acumulación del descontento obrero, se vio agravada en Córdoba a raíz del conflicto originado por el despido de delegados de base en la planta FIAT de Ferreyra. Este hecho, sumado a la designación en marzo de 1971 del nuevo gobernador José Camilo Uriburu, una figura repudiada por toda la ciudadanía cordobesa, reactivó el estado de movilización en toda la ciudad capital. En protesta a esta designación, el plenario de la CGT local convocó para el 4 de marzo a paro general con movilización. En la Plaza Velez Sarsfield se congregaron 6000 trabajadores, reclamando mejoras salariales y cambio de rumbo en la política económica nacional, como así también la destitución del gobernador recientemente designado.

En ocasión de celebrarse la fiesta nacional del trigo en Leones, Uriburu aprovechó ese escenario para responder al reclamo popular que exigía su renuncia. Con un discurso altamente provocativo, en el que decía que “confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, anida una venenosa serpiente cuya cabeza quizá Dios me depara el honor histórico de cortar de un solo tajo”. Estas

palabras, constituyeron un insulto para las masas populares y un desprecio a sus reclamos, lo que provocó un nuevo estallido insurreccional , “el viborazo”.

El Comando de lucha de la CGT cordobesa ¹⁸, que se había formado con el propósito de resistir la persecución promovida por Uriburu sobre la militancia obrera, se reunió el 9 de marzo y resolvió un plan de lucha que incluía la ocupación de fábricas. Previendo que se repitieran situaciones similares al Cordobazo, Levingstón envió al General Alcides López Aufranc a conducir las fuerzas represivas. El 12 de marzo, se produce un enfrentamiento entre los obreros del SITRAC y SITRAM que salían movilizados de sus plantas y la guardia de infantería. Episodio donde muere el obrero mecánico Alfredo Cepeda. La respuesta de la CGT local no se hizo esperar, la que resolvió convocar a huelga general y movilización para el 15 de marzo. Ese día, luego de un acto masivo en Plaza Velez Sarfield, las diferentes columnas obreras se encaminaron a ocupar distintos barrios de la ciudad, produciéndose fuertes enfrentamientos con la guardia de infantería. Las barricadas populares en los barrios duraron hasta altas horas de la noche, varios bancos extranjeros fueron incendiados, como así también concesionarias automotrices y otros “símbolos del imperialismo” – como se estilaba decir entonces- . El 16 de marzo, el ejército ocupó la ciudad. Fueron intervenidos sindicatos y detenidos varios dirigentes y militantes de base. Durante el mes de abril, se sucedieron puebladas en Casilda, Orán y Cipolletti.

El protagonismo que en esa jornada de lucha demostró el sindicalismo de liberación (peronismo combativo) y el sindicalismo clasista (izquierda no tradicional), produjo un endurecimiento del gobierno, que intervino a los sindicatos más combativos, encarcelando a sus dirigentes, como fueron los casos de Agustín Tosco y Atilio López. En octubre de 1971, el gobierno disolvió los sindicatos SITRAC y SITRAM.

Para marzo de 1971, existía un amplio desarrollo de la acción guerrillera, que acompañó la movilización insurreccional del “Viborazo”. Este hecho, fue una de las causas de la caída del gobierno de Levingston. La cúpula de las fuerzas armadas eligió al Gral. Agustín Lanusse para conducir la etapa final de la dictadura militar, quién tuvo la

¹⁸ Comando de lucha de CGT de Córdoba, formado por: Atilio López (Unión Tranviarios Automotores), Agustín Tosco (Luz y Fuerza), Mario Bagué (SMATA, mecánicos), Adolfo Cortés (molinero), Juan Romero (UOM, metalúrgicos) y José Aizpurúa (empleados públicos).

misión de gestionar con sentido continuista la llamada “salida democrática”. En el discurso del Gral. Lanusse donde anuncia el levantamiento de la proscripción de los partidos políticos, en julio de 1971, sostenía que: “El Gran Acuerdo Nacional (GAN) no es algo que concluye en una salida electoral. Es una solución política que supone ciertas condiciones para el funcionamiento político. Esas condiciones son: *que la mayoría que exista en este país no tenga ninguna duda de que va a tener que respetar a la minoría*”¹⁹.

La dictadura militar hasta el Cordobazo, había contado con el consenso de la mayoría de las fracciones de la burguesía local y del capital multinacional -con excepción de la burguesía agraria-. Durante la gestión de Onganía, las prácticas coactivas se convirtieron en el modo habitual de respuesta al conflicto social, por eso, el respaldo social a ese gobierno fue cada vez más escaso. La pérdida de consenso del gobierno dentro del espacio de la burguesía, se debió a que en vez de asegurar la reproducción del conjunto de intereses que conformaban el capitalismo argentino, lo puso en riesgo, al agudizar las contradicciones entre las fracciones burguesas del bloque industrialista y el resto de la sociedad. Con esa forma autoritaria de gobernar, la dictadura militar puso en riesgo no sólo determinada forma de acumulación, sino el interés conjunto del capitalismo dependiente. El conflicto social se agravó a tal punto, que la protesta sectorial al convertirse en una vía inútil de reclamo, dio paso a las insurrecciones populares, las que además de reclamar la recuperación de la república, empezaron a reivindicar la transformación económico-social del país.

En julio de 1971, fue derogado el decreto que proscribía la actividad de los partidos políticos. La cúpula militar fue conciente, que la institucionalización del país y la contención del conflicto social, implicaba la legalización del peronismo, de lo contrario la iniciativa iba al fracaso. La estrategia del GAN, estuvo dirigida a apuntalar aquellos candidatos continuistas, respaldándolos con medidas de bienestar, como fue la creación del PAMI. El GAN, también incluyó el aislamiento y represión de las denominadas “fuerzas subversivas”, es decir, las diferentes corrientes combativas del sindicalismo y las organizaciones de lucha armada. Varios factores explican el fracaso del GAN, el principal fue Perón, que contrarrestó el intento militar por cooptarlo.

¹⁹ Diario “La Nación” y “El Cronista Comercial”

Más de una década y media de proscripción, habían convertido a Perón en símbolo de la resistencia popular. Por eso, el gobierno de Lanusse intentó cooptarlo, para evitar que se convirtiera en líder de la oposición. Después que fracasaron las diferentes maniobras para cooptarlo, inclusive la que Lanusse intentó a través de Jorge Daniel Paladino –delegado personal de Perón en el país-, la respuesta de Perón al GAN, fue construir una alianza de oposición a la dictadura militar, denominada “La Hora del Pueblo”. Más adelante, en marzo de 1972, el peronismo convocó a formar el Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI), que se convirtió en la fuerza política que condensó la oposición mayoritaria a la dictadura militar.

La figura de Arturo Mor Roig en el Ministerio del Interior, representó una señal muy clara del involucramiento del radicalismo en los planes continuistas del gobierno militar. La elección de un hombre del radicalismo para que se hiciera cargo de la gestión política del GAN, tuvo que ver con antiguos lazos antiperonistas que unían a Lanusse con el sector liberal del radicalismo. El radicalismo fue conciente de los costos y beneficios de ese pacto con el gobierno militar, el cual apostaba a que el FREJULI no alcanzara la mayoría electoral en la primer vuelta de las elecciones de 1973, ofreciéndose como la fuerza política que en la segunda vuelta podía garantizar el continuismo juntando todo el espectro antiperonista y la alianza burocrático corporativa que había organizado el gobierno.

La nueva generación que se fogueó en la oposición a la dictadura militar, que hizo su bautismo en el Cordobazo y creció en experiencia durante la lucha de resistencia, se sintió interpretada y se identificó con el Programa de Liberación Nacional que proponía el FREJULI. Esta nueva generación, fue un factor clave del triunfo electoral del frente liderado por el peronismo.

El “gran acuerdo nacional” y “la hora del pueblo”.

Como la movilización de masas del Cordobazo había terminado con el gobierno de Onganía, el segundo cordobazo más conocido como “el Viborazo”, puso fin al otro intento por perpetuar la dictadura, es decir, al gobierno de Levingston. El interior insurrecto, liderado por las movilizaciones obreras, provocó la caída de cada gestión

autoritaria que intentaba perpetuarse en el poder, y en ese contexto de enfrentamiento, se desarrollaron las organizaciones populares de lucha armada.

El 14 de abril de 1971, fue elegido Atilio López -Sec. Gral. de Unión Tranviarios y Automotores (UTA)- como Secretario General del Plenario de Gremios Confederados de Córdoba, y como Secretario Adjunto Agustín Tosco, quién conducía Luz y Fuerza de Córdoba. Mientras la CGT nacional titubeaba en definir una posición política frente a la dictadura, para no arriesgar el acuerdo corporativo de las obra sociales que habían negociado con la gestión del ministro de trabajo San Sebastián, el sindicalismo cordobés (sindicalismo combativo, sindicalismo de liberación y sindicalismo clasista) se oponía frontalmente a la dictadura, con paros activos que incluía ocupación de fábricas, liderando de esa forma las insurrecciones de masas donde convergió un amplio espectro social .

Para diferenciarse de la CGT nacional y de los compromisos que ésta arrastraba con el gobierno, la CGT de Córdoba convocó en una fecha coincidente con el segundo aniversario del Cordobaza, al Plenario Nacional de Gremios Combativos. En dicho Congreso, posterior al Viborazo y a la caída de Levingston, los gremios combativos además de criticar las claudicaciones de la CGT de Rucci, que por ejemplo no se había solidarizado con la lucha librada por la CGT de Córdoba durante el Viborazo, se pronunciaron contra los intentos de normalización institucional continuistas de Lanusse. Otra definición importante del Congreso, fue cuando se reivindicó continuador del Programa de Huerta Grande de 1962 y del Programa del 1º de Mayo de la CGT de los Argentinos. La izquierda sindical liderada por Agustín Tosco apoyó a dicho Congreso, no ocurriendo lo mismo con el “clasismo” (SITRAC-SITRAM) ni con el MUCS, quienes cuestionaron el carácter peronista del mismo, y desaprobaron aquella parte del pronunciamiento del Congreso que daba su solidaridad a las organizaciones de lucha armada.

Esta solidaridad de los gremios combativos con las organizaciones populares de lucha armada, surgió, de haber compartido las barricadas del Viborazo y de los apoyos concretos que la guerrilla dio en varias ocasiones a los conflictos obreros. Las cuatro organizaciones armadas peronistas, FAP, FAR, Montoneros y Descamisados, realizaron varias operaciones conjuntas. Las más significativas, fueron aquellas de apoyo a las

luchas obreras, como ocurrió en Córdoba cuando la patronal y el gobierno militar acordaron disolver a los sindicatos de la fábrica FIAT, SITRAC Y SITRAM. En esa ocasión, en noviembre de 1971, tres organizaciones armadas, FAP, FAR y Montoneros, planificaron el secuestro de un alto ejecutivo de FIAT, que no pudo concretarse debido a fallas operativas y al enfrentamiento que se produjo con las fuerzas de seguridad, en lo que se denominó el “combate de Ferreira”, donde las organizaciones armadas peronistas sufrieron cuatro bajas: Agustín Villagra, Juan C Peressini, Juan Baffi y Carlos Olmedo.

La articulación de la movilización de masas y la lucha armada, se convirtió en una amenaza no sólo para la dictadura militar, sino también para el régimen de acumulación imperante. Y esta situación fue percibida por las fracciones del capital con mayor peso dentro del bloque de poder, las que no estaban dispuestas a seguir respaldando a un régimen autoritario en crisis, arriesgando sus beneficios económicos y privilegios políticos. Por eso, presionaron sobre las fuerzas armadas para que abriera la “salida democrática”, y Lanusse representó dentro de las fuerzas armadas el sector que se hizo eco de las presiones del bloque de poder.

Lo que había cambiado y que además constituía el temor principal del bloque de poder, fue la conciencia social y política de las clases populares. Este avance en la conciencia alcanzado por la mayoría de la sociedad, fue resultado del ascenso de la lucha de masas contra la dictadura militar. Esa práctica conciente adquirida a partir de la lucha, implicó un aprendizaje colectivo de lo que estaba en juego en las relaciones de poder entre clases y entre nuestro país y las metrópolis capitalistas.

Las conclusiones de ese aprendizaje colectivo, no se restringieron a cuestionar sólo una forma autoritaria de gobierno. Si bien esta última forma de conciencia colectiva, fue mayoritaria entre las clases populares, existieron otras formas más radicalizadas que si bien no fueron mayoritarias, llegaron abarcar un espectro social lo suficientemente amplio, que despertaron temores en el bloque de poder. Esa forma de conciencia más radicalizada, tuvo un carácter integral, ya que cuestionó simultáneamente, tanto al gobierno de la dictadura militar, como al régimen de acumulación predominante en el capitalismo argentino.

La crisis de la dictadura militar fue una consecuencia del Cordobaza, del Viborazo y de todas las demás insurrecciones del interior, como así también del desarrollo alcanzado por las organizaciones populares de lucha armada, lo que obligó a la cúpula de las fuerzas armadas a una retirada ordenada y a intentar una maniobra continuista, el “Gran Acuerdo Nacional”.

Además de las relaciones antagónicas que se establecieron entre la dictadura militar y las clases populares, durante la gestión de Onganía y Levingston, aparecieron contradicciones propias dentro del bloque de poder, es decir, conflicto de intereses entre las fracciones de la gran burguesía, por ejemplo, el conflicto que resultó de la aplicación de las retenciones agrarias con el fin de financiar la expansión de las ramas industriales de capital intensivo –donde se concentraban las inversiones multinacionales-. Estas contradicciones al interior del bloque de poder, resultado de resolver autoritariamente el conflicto de intereses interburgués, constituyeron otro factor de crisis de la dictadura. Pero no generaron divorcios definitivos entre las fracciones enfrentadas de la gran burguesía, sino tan sólo distanciamientos temporarios.

Las diferentes fracciones de la gran burguesía no estaban unidas por un mismo proyecto de gobierno, por tanto, al no existir consenso ni predominio dentro del bloque de poder, tampoco existía eficacia del régimen burocrático autoritario para subordinar a las clases populares. El gobierno de la dictadura militar, al ser incapaz de encolumnar detrás de su proyecto al conjunto de las fracciones burguesas y al incumplir con los compromisos corporativos que le habían otorgado consenso en el momento del golpe, por ejemplo con el sindicalismo vandorista, no consiguió el soporte social necesario para intentar una subordinación “mínimamente legítima” de las mayorías populares. Esta incapacidad para construir consensos corporativos creíbles, fortaleció el carácter autoritario del gobierno. Por eso, empezó a recurrir con mayor frecuencia a la violencia represiva, para conseguir el disciplinamiento social. Y así empezó su decadencia.

Las luchas sociales y políticas de la clase obrera, de los pequeños y medianos empresarios y de los profesionales y estudiantes de clase media, fueron parte de un proceso, donde la dictadura militar demostró su incapacidad para gobernar regulando las contradicciones de clases existentes en la sociedad. El ascenso de la lucha de masas contra la dictadura, y la incapacidad de ésta para resolver las contradicciones que

también se abrían dentro del bloque de poder, fueron desgastando su fuerza, haciéndole perder credibilidad no sólo dentro de las clases populares, sino también dentro de las fracciones de los grandes empresarios. Estos últimos, habían quedado enfrentados por la medida oficial de las retenciones agropecuarias, abriéndose a partir de ahí, el conflicto de intereses entre la burguesía agraria y la gran burguesía industrial -beneficiaria del proyecto del gobierno-.

Cuando ambas fracciones de la gran burguesía, comenzaron a percibir que la perpetuación de la dictadura militar hacía peligrar no sólo la forma de acumulación predominante en la coyuntura sino a todas las formas de acumulación que contenía el capitalismo dependiente argentino, es cuando empezaron a presionar sobre las fuerzas armadas para que abrieran la “salida democrática”. La fracción de la gran burguesía industrial, que hasta ese momento se había beneficiado económicamente con la dictadura militar, prescindiendo de establecer acuerdos con las clases populares e inclusive despreciando una reconciliación con la burguesía agraria, ahora, frente a la posibilidad de un cuestionamiento masivo al propio capitalismo dependiente, se lanzaron a una recomposición urgente del bloque de poder.

Para reconstituir vínculos de poder seriamente dañados durante la dictadura militar, la burguesía industrial precisó reconciliarse con la burguesía agraria y actualizar su alianza con los tradicionales sectores auxiliares²⁰, estos últimos provenientes de sectores medios profesionales y gerenciales y de la dirigencia obrera burocratizada. Para reconstruir el bloque de poder y la alianza política que lo expresara, es que se creó el “Gran Acuerdo Nacional”, cuyo propósito no fue otro que controlar el proceso de “salida democrático”, para poder coronarlo y así resguardar la estructura capitalista del país. Pero el control sobre la “salida democrática” no era tan sencillo de concretar, por más que existieran abundantes antecedentes en nuestra historia acerca de diferentes formas de cooptación con que los poderes de turno manipularon a las clases auxiliares.

²⁰ Antonio Gramsci, como parte de la tradición marxista, utiliza la categoría analítica “clase social” para marcar las diferencias sociales en el marco de las relaciones de producción capitalistas. Mientras que las categorías “clase dominante”, “clase auxiliar” y “clase subalterna”, que son producto de su propia elaboración teórica, constituyen aperturas de la categoría “clase social”, necesarias para abordar el análisis de las relaciones de poder entre clases. Para Gramsci, la función auxiliar que cumplen tradicionalmente los grupos profesionales de clase media, tiene como finalidad producir el consenso necesario para la dominación “legítima” requerida por la construcción hegemónica burguesa, es decir, conseguir la subordinación de las clases subalternas mediante el consenso –reconocimiento social de un sistema de intereses y valores- construido a través de las instituciones políticas.

La dificultad mayor que tuvo el gobierno de Lanusse, para obtener respaldos sociales a su proyecto continuista, fue conseguir el apoyo de los sectores auxiliares de clase media. Esta dificultad del régimen, se debía a los cambios que habían experimentado dichos sectores durante la década del sesenta, en su composición estructural e ideológica.

El crecimiento de la conciencia social y nacional de la clase media durante la década del sesenta, resultó de sus desilusiones políticas con los gobiernos seudodemocráticos y de dictadura que se sucedieron a partir de 1955 y de los enfrentamientos sociales que la mayoría de sus sectores tuvo con la dictadura militar del 66. En esos enfrentamientos, aquel adversario de clase que hasta ese momento había sido el peronismo - desde el 55-, se convirtió en el espacio político donde importantes sectores de la clase media sellaron su alianza con la clase obrera.

Las adversidades sociales y políticas que tuvo que soportar la mayoría del pueblo, generó un sentimiento colectivo de solidaridad que favoreció el surgimiento de un frente opositor a la dictadura militar. En ese contexto, la nueva generación dio sus primeros pasos políticos a través de prácticas semiclandestinas y clandestinas. En los diferentes terrenos de lucha donde se desarrolló la resistencia a la dictadura militar, esa nueva generación se encontró con la militancia combativa proveniente de generaciones anteriores, de la que recuperó valiosos aprendizajes políticos, que la condujo a romper con antiguos paradigmas liberales y con prácticas partidocráticas.

Dentro de las clases populares que compartieron ese sentimiento de semejanza y solidaridad, obtenido en las movilizaciones de resistencia en oposición a la dictadura militar, estaban aquellos que seguían referenciándose en el viejo sistema de partido y cuya reivindicación se restringía a la recuperación del Estado de derecho. Por otro lado, estaban aquellos identificados con un cambio más integral de la sociedad y de su gobierno, que además de reivindicar la recuperación del Estado de derecho y el Estado social, planteaban la necesidad de transformar la estructura económica dependiente del país, para avanzar hacia una forma de organización social y política más democrática.

Estas diferentes expresiones de la conciencia popular opositora a la dictadura militar, lograron manifestarse a través de coincidencias programáticas y acuerdos políticos, en

un documento elaborado por la mayoría de las fuerzas partidarias denominado “La Hora del Pueblo”. Este documento, fue una respuesta política autónoma de las clases populares, frente al intento continuista que significó la propuesta oficial del Gran Acuerdo Nacional.

La polémica entre las organizaciones armadas frente a la “salida democrática”.

En nuestro país, la lucha armada no llegó a constituir un proyecto político homogéneo, entre otras causas, por las diferentes interpretaciones que hubo en las organizaciones acerca de qué estrategia seguir frente a la “salida democrática” lanzada por la dictadura militar en 1971. Mientras algunas de las organizaciones armadas, divorciaron su práctica de la convergencia popular que se produjo entorno del peronismo y del FREJULI, otras hicieron todo lo contrario, participando activamente en el proceso de movilización social y político que llevó al peronismo al gobierno.

La contradicción entre lucha de masas y lucha armada, no existió durante el proceso de oposición a la dictadura militar. Esta contradicción apareció primero en las organizaciones armadas no peronistas, en el tramo final de la “salida democrática”. Y se puede decir, que esta contradicción abarcó a todas las organizaciones armadas, durante el tercer gobierno peronista. Como antecedente, en la etapa insurreccional que se abrió con el Cordobazo, se puede decir que esa contradicción estuvo presente en las diferentes interpretaciones acerca de la vigencia del peronismo para liderar al movimiento de masas en una etapa insurreccional. Más precisamente, si el peronismo como última expresión histórica de ese movimiento de masas, tenía la capacidad de contener las dos formas de cuestionamiento popular a la dictadura militar que habían surgido de ese proceso insurreccional – dualidad teórica, destacada por Guillermo O`donell ²¹-. Cuál eran esas dos formas de cuestionamiento a la dictadura militar. Una de esas formas, se limitó a plantear el cuestionamiento al régimen burocrático-autoritario, exigiendo una “salida democrática” inmediata para alcanzar la normalización institucional. La otra forma de cuestionamiento, agregaba a esta reivindicación de cambio de régimen, la necesidad de un cambio de sistema, es decir, terminar con el sistema capitalista dependiente. Para completar la hipótesis de O`donell,

²¹ O`donell Guillermo, “El Estado burocrático autoritario”, hipótesis del trabajo. Ed. Univ. Belgrano, HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 12, V1 (2010), pp. 75-112 109
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica

correspondería aclarar que esta última forma de cuestionamiento, contemplaba a su vez dos caminos de salida: uno, mediante la construcción de una alternativa nacional dentro del capitalismo; y otro, como vía directa al socialismo. La necesidad o no de atravesar una etapa de transición de “capitalismo nacional” para arribar al socialismo, fue lo que en el tramo final de la “salida democrática” dividió a las organizaciones armadas.

Esta diferencia dentro de la militancia, no fue sólo de carácter conceptual, representó una diferencia teórico-práctica, pues significó diferentes perspectivas de plantear la relación entre el movimiento de masas y la lucha armada.

En la primera etapa de la dictadura militar encabezada por Onganía, cuando se clausuraban una a una todas las vías de expresión social y política de la ciudadanía, donde el “partido militar” y el bloque de intereses que él representaba, se perfilaban cada vez más para 1968 como únicos enemigos de las clases populares, las diferencias señaladas en el punto anterior que podían dividir a las organizaciones armadas, quedaron relegadas a un segundo plano.

Cuando se abrió con la estrategia del GAN, el proceso de “salida democrática”, aparecen dos tendencias bien diferenciadas: la continuista, que fue representativa de los compromisos corporativos atados por el régimen, pero que también incluyó a los “políticos liberales” que esperaban su turno para relevar a los militares –ofreciéndose como garantes para que nada cambie-; y la tendencia que impulsaba el cambio de régimen y de sistema, originada en la necesidad de sostener la movilización opositora a la dictadura militar y que en la etapa de “salida democrática” interpeló a las posiciones continuistas.

En el tramo final de ese proceso, donde se dirimía, si la salida electoral tendría un sentido continuista o de cambio, fue cuando el peronismo logró condensar a las diferentes corrientes populares que venían oponiéndose a la dictadura militar. Y a partir de ese liderazgo opositor, Perón consiguió convocar al frente electoral que logró imponerse sobre la alianza continuista.

El reconocimiento o no del retorno de Perón, como reivindicación central de la movilización opositora a la dictadura militar y su significado como eje cuestionador del

proyecto continuista del GAN, fue lo que en esa coyuntura separó a las organizaciones armadas. Encuadrar o no la lucha armada en la estrategia de salida democrática planteada por el peronismo, definía en esa coyuntura las diferencias políticas entre las organizaciones armadas, es decir, según la definición que se tomara sobre el liderazgo opositor del peronismo, surgían diferentes perspectivas políticas de la relación entre las organizaciones armadas y el movimiento de masas. Esta fue la diferencia principal que existió entre las organizaciones armadas peronistas (FAP, Montoneros, FAR y Descamisados) y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Aunque la preocupación sobre las posibles ingerencias que las corrientes continuistas podía tener sobre el futuro gobierno popular, fue compartida por todas las organizaciones.

Dentro de las organizaciones armadas peronistas, la que convirtió esta preocupación en su eje político, fue la FAP. Lo acertado de las FAP, fue poner en primer plano del debate de la militancia de aquella época, el conflicto interno que caracterizaría al gobierno popular, entre las corrientes continuistas y las tendencias que impulsaban el cambio. Pese a su acertado pronóstico, el error de las FAP, fue formular a destiempo su propuesta de “alternativa independiente”. La consecuencia de ese error, fue su aislamiento del movimiento de masas. Esta iniciativa, fue considerada por la FAP, como una necesidad estratégica para que la alianza de las clases populares no quedara subordinada al proyecto del pacto social liderado por la burguesía monopólica local, que durante la dictadura militar había demostrado ampliamente su subordinación estructural al capital multinacional. Esta consideración, surgía del análisis de la correlación de fuerza que estaba detrás del “pacto social”, cuya conclusión era en lo inmediato, que la gestión de ese pacto social era más susceptible de ser influenciada por los compromisos burocrático corporativos originados durante el proceso militar que por la denominada tendencia revolucionaria. Y frente a esa perspectiva, había que asegurar una estrategia independiente para las clases populares.

Si bien en el largo plazo, existió coincidencia entre las organizaciones armadas peronistas sobre la necesidad de un desarrollo independiente del poder político de las clases populares, la diferencia se planteó frente a la coyuntura de las elecciones y del gobierno popular. En el gobierno de Cámpora, exceptuando una fracción de las FAP, las restantes organizaciones armadas peronistas se habían fusionado bajo el nombre de Montoneros. Para esta nueva organización político-militar, la etapa democrática se

caracterizaba por ser un proceso donde las clases populares transitaban su experiencia inmediata siguiendo el liderazgo de Perón y, que toda alternativa que se pusiera como meta el socialismo, debía primero acompañar esa transición a través de una etapa de capitalismo nacional, enfrentando a las tendencias continuistas dentro del gobierno popular, asumiendo la lucha interna dentro del peronismo. Para una parte importante de la militancia de Montoneros, no asumir la posición de lucha dentro del movimiento peronista, significaba caer en prácticas vanguardistas, que terminaban aislando a la militancia. Este planteo de Montoneros que se sostuvo durante el gobierno de Cámpora, se fue modificando durante el gobierno presidido por el Gral. Perón.

Dasso, Carlos. 17/07/09

Para citar este artículo:

Dasso, Carlos Alberto (18-03-2010). INSURRECCION POPULAR Y LUCHA ARMADA. La generación de los sesenta.

HOLOGRAMÁTICA - Facultad de Ciencias Sociales UNLZ

Año VII, Número 12, V1, pp.75-112

ISSN 1668-5024

URL del Documento : <http://www.cienciarred.com.ar/ra/doc.php?n=1202>